

Víctor Delfín, Elvira de la Puente, Enrique Victoria y Osvaldo Cattone, entre otros, manteniendo el espírtu ante la adversidad. La marcha será el sábado 5 y el punto de partida será el Teatro Marsano.

La existencia de una política cultural es la causa olvidada por antonomasia de todo gobierno reciente. Sin embargo, el nombramiento de Beatriz Merino como Presidente del Consejo de Ministros ha significado una esperanza de rectificación. Ella ha anunciado que "sus mejores decisiones son después de asistir a conciertos" y que "un país sin cultura es un país sin alma". Si esta vocación se concreta en políticas político-tributarias, esto implicará que desorganizados espamos de producción editorial (ver derecha) no sean la única "política cultural" del país.

Policías no pudieron evitar "fusilamiento".





Según G. Coronado, costó US\$ 350 mil.

L anticipo de la marcha de más de 300 artistas que se realizará este 5 de julio, y que recorrerá toda la Av. Arequipa, se vio en la Plaza de Armas el pasado martes cuando la indignación llevó a acción a unos cuarenta actores y músicos.

Ellos protestaron de una manera creativa contra las disposiciones legales del Ejecutivo, quien observó, la semana pasada, la Ley del Artista, la Ley del Libro y promulgó el Decreto Supremo Nº 084-2003 en el que se quitan las exoneraciones del IGV a los espectáculos culturales.

El articidio, que recoge las consecuencias directas de esta "política cul-

tural", se produjo de manera simbólica en una recreación que involucró, entre otros, a los actores Alberto Isola, Giovanni Ciccia, Santiago Magill, Salvador del Solar, el músico Eduardo García Barrios, las actriz Mónica Sánchez, los dramaturgos Eduardo Adrianzén y Mariana De Althaus, entre otros. La intervención, organizada por la directora de teatro Chela de Ferrari y alumnos de Artes Escénicas de la Católica (respaldada por la presencia del decano de dicha Facultad, Luis Peirano), consistió en el fusilamiento de personajes que caracterizaban distintas disciplinas artísticas. Queda para la anécdota la condenable represión de la Policía, sobre todo al actor Alejandro Córdova, quien fungía de pregonero y relator de la sentencia, así como la ingenua "astucia" de la fuerza pública, que levantó sus escudos antimotines cuando éstos se disponían a perpetrar el "fusilamiento", en términos escénicos, era claro.

En realidad, el problema de la política cultural es largo y no se inicia ni acaba en la ceguera gobiernista. Pero se debe decir que con Toledo se está llegando a niveles de incongruencia insoportables. Un ejemplo de ellos es la política editorial del Estado, inorgánica, a juzgar por Germán Coronado, y que presenta casos como éste: el excelente y necesario libro "Pisco es Perú", de Mariella Balbi, publicado por PromPerú, a ojo de buen cubero (la entidad estatal se negó a dar información exacta), y asumiéndole un tiraje de entre 1,500 y 2,000 ejemplares, habría costado la friolera de US\$ 350 mil. El propio Coronado considera que el rol del Estado como editor cuesta alrededor de US\$ 2 millones anuales, lo que no estaría mal si este gasto estuviera enmarcado en una Ley del Libro que regularice el presupuesto, a la vez que se dan todas las facilidades tributarias a la empresa privada para que ésta dinamice su "industria".

Otro ejemplo triste del disloque cultural es el caso de PetroPerú. Mientras sus directivos son acusados de utilizar el presupuesto en solventarse cervezas y mujeres públicas, a la vez que a la entidad se la sindica como la "caja chica" del gobierno, el Premio Copé, organizado desde 1979, uno de los más prestigiosos y antiguos, aún no realiza su convocatoria, originalmente lanzada desde marzo o abril, mientras que dentro de la institución se rumorea que se está poniendo trabas para firmar las partidas legales. Lo que terminaría de delinear un panorama de desastre para la cultura en versión toledista.